



# **Efectos de la Cooperación entre Colombia y EE.UU en el marco de la seguridad ambiental en el periodo de 2018 a 2024.**

Mayor Anthony Alexis Hernández Gómez

Artículo para optar al título profesional:

**Magister Seguridad y Defensa Nacional**

Escuela Superior de Guerra "General Rafael Reyes Prieto"  
Bogotá D.C., Colombia  
2025

DATOS GENERALES	
<b>Nombre del estudiante</b>	: Mayor (EJC) Anthony Alexis Hernández Gómez
<b>Identificación</b>	: 80727797
<b>Programa académico</b>	: Maestría Seguridad y Defensa Nacional
<b>Tutor metodológico</b>	: DO. Jonnathan Jiménez Reina
<b>Tutor temático</b>	: DO.Claudia Patricia Garay Acevedo
<b>Fecha de entrega</b>	: 26 de agosto de 2025
<b>Extensión</b>	: Palabras

#### DECLARACIÓN DE ORIGINALIDAD Y CESIÓN DE DERECHOS

El autor declara que este artículo fue escrito de acuerdo con la normatividad de la Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto” (ESDEG) y no existe ningún potencial conflicto de interés relacionado con este. Las posturas y aseveraciones presentadas son resultado de un ejercicio académico e investigativo que no representan la posición oficial ni institucional de la ESDEG, las Fuerzas Militares de Colombia o el Ministerio de Defensa Nacional.

Este artículo es enteramente mi propio trabajo y no ha sido presentado para la obtención de un título en esta u otra Institución de Educación Superior. Se han referenciado todos los trabajos y puntos de vista de otros autores, así como los datos de otras fuentes utilizadas. No se emplearon herramientas de generación de contenido por Inteligencia Artificial para su elaboración.

El autor acepta ceder los derechos de publicación en favor de la ESDEG y su Sello Editorial de acuerdo con los términos de la licencia Creative Commons: Reconocimiento-No Comercial – Sin Obras Derivadas.

#### AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN

El autor autoriza que este artículo sea publicado por el Sello Editorial ESDEG en su repositorio institucional y esté disponible bajo una modalidad de acceso abierto.

Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”  
Bogotá D.C., Colombia

# **Efectos de la Cooperación entre Colombia y EE.UU en el marco de la seguridad ambiental en el periodo de 2018 a 2024.**

**Effects of cooperation between Colombia and the United States in the  
framework of environmental security from 2018 to 2024.**

Antonhy Alexis Hernandez Gomez<sup>1</sup>  
Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto

---

<sup>1</sup> Mayor del Ejército Nacional de Colombia. Candidato a magíster en Seguridad y Defensa Nacional, Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”, Colombia. Profesional en Ciencias Militares, Escuela Militar de Cadetes “General José María Córdova”, Colombia. <https://orcid.org/0000-0003-2004-7466> - Contacto: [Antonhy.hernandez@esdeg.edu.co](mailto:Antonhy.hernandez@esdeg.edu.co).

## **Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”**

Bogotá D.C., Colombia

**Resumen:** La cooperación entre Colombia y Estados Unidos en seguridad ambiental se centra en la lucha contra la deforestación, la conservación de la biodiversidad y el fortalecimiento de la seguridad ambiental en general, por esta razón el presente artículo se centra en evaluar los efectos de la Cooperación entre Colombia y EE.UU. en el marco de la seguridad ambiental en el periodo de 2018 a 2024, entendiendo que durante este periodo se ha buscado proteger la riqueza natural de Colombia y contribuir a la sostenibilidad global. El presente trabajo se realizó bajo un enfoque metodológico cualitativo. Se evidencia que la cooperación entre Colombia y Estados Unidos ha crecido más allá de los pilares tradicionales de seguridad, para incluir el trabajo conjunto en ciberseguridad, defensa regional y la lucha contra el cambio climático, contribuyendo a la estabilidad regional y al desarrollo sostenible.

**Palabras clave:** Cooperación binacional; estabilidad regional; deforestación; Política antidrogas; seguridad ambiental.

**Abstract:** Cooperation between Colombia and the United States in environmental security focuses on combating deforestation, conserving biodiversity, and strengthening environmental security in general. Therefore, this article focuses on evaluating the effects of cooperation between Colombia and the United States in the framework of environmental security from 2018 to 2024, understanding that during this period, the goal has been to protect Colombia's natural resources and contribute to global sustainability. This work was conducted using a qualitative methodological approach. It is evident that cooperation between Colombia and the United States has grown beyond the traditional pillars of security to include joint work in cybersecurity, regional defense, and the fight against climate change, contributing to regional stability and sustainable development.

**Keywords:** Binational cooperation; regional stability; deforestation; anti-drug policy; environmental security.

## [T1] Introducción

En las últimas décadas, la cooperación internacional ha adquirido una dimensión estratégica en el abordaje de problemáticas transnacionales, especialmente aquellas relacionadas con el narcotráfico, el deterioro ambiental y la seguridad regional. Colombia, históricamente afectada por el conflicto armado interno y por el impacto de las economías ilegales, ha sido uno de los principales receptores de cooperación por parte de Estados Unidos, particularmente en el marco de la lucha contra los cultivos ilícitos. Esta relación bilateral ha estado marcada por una constante interacción entre intereses de seguridad, estabilidad política y control territorial, siendo la seguridad ambiental un componente cada vez más relevante dentro de esta agenda conjunta (Vanegas et al., 2022; Rincón, 2013).

En este contexto, la presente investigación tiene como propósito analizar los efectos de la cooperación entre Colombia y Estados Unidos en el ámbito de la seguridad ambiental durante el periodo 2018–2024, con énfasis en las implicaciones socio ecológicas derivadas de las estrategias antidrogas, en particular la erradicación forzada, la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos y la militarización de áreas ambientalmente sensibles. La lucha contra la siembra de cultivos ilícitos y sus múltiples impactos sigue siendo uno de los principales desafíos que enfrenta el Estado colombiano en territorios históricamente marginados, donde convergen dinámicas de violencia, ausencia institucional, pobreza estructural y degradación ambiental (Peñaranda et al., 2021; Salas et al., 2019).

Colombia ha sido un punto neurálgico en la geopolítica de las drogas por razones geográficas, políticas y económicas. Su acceso a los océanos Atlántico y Pacífico, la densa red de ríos amazónicos y andinos, la cercanía con países productores y consumidores de estupefacientes, y la presencia de actores armados ilegales han facilitado la consolidación de una economía

## **Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”**

Bogotá D.C., Colombia

cocalera que afecta tanto la seguridad nacional como la estabilidad regional (Rincón, 2013). La expansión no regulada de cultivos ilícitos ha desplazado a comunidades, degradado ecosistemas estratégicos como la Amazonía, y obstaculizado la implementación de políticas de desarrollo rural integral (Vélez et al., 2020; Krause, 2020).

En respuesta a esta situación, la cooperación de Estados Unidos con Colombia se ha consolidado como un eje central de la política exterior norteamericana hacia América Latina. Dicha cooperación ha incluido asistencia técnica, entrenamiento militar, transferencia de tecnología, inteligencia estratégica y apoyo financiero significativo. Solo en el año fiscal 2023, Estados Unidos destinó más de 90 millones de dólares a programas de seguridad en Colombia, priorizando el fortalecimiento de las Fuerzas Militares, la mejora de la interoperabilidad bajo estándares de la OTAN, la ciberseguridad y la lucha integral contra el narcotráfico. Esta alianza estratégica, que se remonta al Plan Colombia, ha evolucionado hacia un enfoque más amplio que incorpora aspectos de gobernanza, derechos humanos y protección ambiental, aunque no exento de contradicciones y tensiones (UNODC, 2021; Richani, 2020).

Una muestra concreta de esta cooperación es la campaña Artemisa, lanzada en 2018, la cual combina objetivos militares con propósitos de conservación ambiental. Esta campaña buscó detener la expansión de cultivos de coca en parques naturales y zonas protegidas, utilizando operativos militares para controlar territorios considerados críticos. No obstante, diversas organizaciones y estudios han advertido sobre el carácter represivo de estas medidas, que priorizan el control armado sobre la restauración ecológica y la participación comunitaria, generando tensiones sociales, desplazamientos forzados y criminalización de comunidades campesinas (Garzón, 2020; Hoffmann et al., 2018).

En este marco, la presente investigación se propone responder a la siguiente pregunta: ¿cómo ha sido la relación de cooperación internacional entre Colombia y Estados Unidos en cuanto a seguridad ambiental y la lucha contra los cultivos ilícitos entre 2018 y 2024? Para ello, se parte de un enfoque que articula la seguridad humana, la sostenibilidad ambiental y la política de drogas, analizando los efectos colaterales de las estrategias bilaterales implementadas en el territorio colombiano. Se busca, además, comprender las dinámicas de gobernanza ambiental en contextos de posconflicto, donde las promesas de paz y desarrollo sostenible se ven constantemente desafiadas por la persistencia de economías ilícitas, la débil presencia estatal y la presión por mostrar resultados rápidos en la reducción de cultivos ilegales.

La importancia de este estudio radica en que permite visibilizar las tensiones entre los objetivos de seguridad y los principios de conservación ambiental, en un momento en el que la crisis climática y la pérdida de biodiversidad se han convertido en preocupaciones centrales a nivel global. Comprender los efectos de la cooperación internacional en este ámbito no solo aporta al análisis académico, sino que también ofrece insumos para el diseño de políticas públicas más integrales, participativas y sostenibles.

Desde esta perspectiva, el artículo se estructura en varias secciones. En primer lugar, se expone el marco metodológico que guía el análisis documental. Luego, se desarrolla un examen de la relación entre las políticas antidrogas y sus impactos ambientales en el periodo 2018–2024, destacando el papel de las Fuerzas Militares, las políticas de erradicación y la cooperación con Estados Unidos. Posteriormente, se discuten los efectos ambientales de dichas políticas desde la óptica de la seguridad y la defensa nacional. Finalmente, se presentan las conclusiones, con énfasis en los aprendizajes, limitaciones y recomendaciones para fortalecer la sinergia entre seguridad, desarrollo territorial y protección ambiental en el contexto colombiano.

## **[T1] Metodología**

El presente artículo adopta un enfoque metodológico cualitativo de tipo documental, orientado a comprender y analizar los efectos de la cooperación entre Colombia y Estados Unidos en materia de seguridad ambiental durante el periodo 2018–2024. El enfoque cualitativo permite interpretar fenómenos sociales y políticos en su contexto, privilegiando la comprensión profunda de los discursos, políticas y prácticas que han configurado la relación bilateral en torno a la lucha antidrogas y sus impactos ambientales (Hernández Sampieri et al., 2010).

El método documental fue seleccionado como estrategia de investigación, dada la naturaleza del objeto de estudio y la necesidad de contrastar información proveniente de fuentes primarias y secundarias. En este sentido, se revisaron documentos oficiales, informes técnicos, bases de datos institucionales, estudios académicos, políticas públicas, tratados de cooperación y reportes de organismos internacionales como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), entre otros.

La técnica empleada fue el análisis de contenido y el análisis crítico del discurso institucional, permitiendo identificar patrones, narrativas y lógicas de acción presentes en los documentos revisados. Para ello, se diseñó un instrumento de recolección de datos basado en una matriz de análisis documental, que permitió organizar las fuentes según criterios temáticos como: cooperación internacional, políticas antidrogas, impactos ambientales, militarización, deforestación, sustitución de cultivos y gobernanza ambiental.

El proceso de análisis se desarrolló en varias fases. En primer lugar, se realizó la selección y clasificación de documentos relevantes, priorizando aquellos comprendidos entre 2018 y 2024. Posteriormente, se llevó a cabo una lectura comprensiva y analítica, identificando unidades de significado asociadas a los objetivos del estudio. Estas unidades fueron luego categorizadas y comparadas, para evidenciar convergencias, contradicciones y vacíos en las políticas implementadas.

Finalmente, se elaboró una síntesis interpretativa que permite explicar cómo la cooperación internacional ha influido en las estrategias antidrogas y sus consecuencias socioambientales, considerando el contexto del posacuerdo de paz en Colombia. Esta metodología permitió examinar críticamente la efectividad y coherencia de las acciones binacionales, así como identificar los desafíos estructurales que enfrenta la articulación entre seguridad, desarrollo sostenible y protección ambiental en territorios estratégicos.

## **[T1] Análisis de la relación de cooperación en materia de seguridad entre los responsables políticos de Colombia y Estados Unidos en el periodo de 2018-2024**

Los Estados Unidos y Colombia colaboran en cuestiones de importancia compartida, en particular la mejora de las capacidades y el profesionalismo de las fuerzas armadas colombianas, incluida su profesionalización militar en curso; la mejora de la interoperabilidad conjunta de conformidad con las normas y estándares de la OTAN; el fortalecimiento del control civil de la política de defensa; el fortalecimiento de sus capacidades de ciberseguridad; y la implementación de una estrategia integral de lucha contra el narcotráfico. Estados Unidos prioriza una

## **Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”**

Bogotá D.C., Colombia

gobernanza eficaz, resiliente y responsable del sector de la seguridad para construir asociaciones de seguridad duraderas en todo el mundo, incluida Colombia.

La expansión no regulada de cultivos ilícitos ha desplazado a muchas comunidades colombianas de una proporción significativa de sus territorios y ha provocado una extensa deforestación en áreas ecológicamente críticas. De hecho, en 2008, el 22% del área total dedicada al cultivo de coca era selva tropical y el 8% era bosque ribereño (Rincón, 2013). Además, la presencia estatal en las zonas es insuficiente y la mayoría de la población sufre necesidades básicas insatisfechas, como lo indica una tasa de NBI del 63% (Vélez et al., 2020).

Estas experiencias pueden moldear las percepciones frente a las estrategias de los últimos dos gobiernos en Colombia sobre los riesgos y oportunidades en la aceptación de sus políticas antidrogas (Salas et al., 2019). Colombia es considerada en la actualidad como uno de los países potenciales de producción mundial de hoja de coca, según el informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de las Naciones Unidas (en adelante: SIMCI) mostró que para 2020, el país contaba con un total de 154.000 hectáreas de cultivos de coca, (UNODC, 2021).

Una parte importante de estos cultivos se ubican fuera de la frontera agrícola, es decir, en áreas donde las actividades de agricultura están prohibidas o condicionadas por ley, incluidas áreas protegidas amparadas por el SPNN Sistema Nacional de Parques Naturales (Bonilla, 2019). Los cultivos ilícitos en los parques nacionales naturales del territorio colombiano, generan importantes impactos ambientales, como contaminación del agua y del suelo por el uso de agroquímicos y deforestación, también la violencia, ya que las actividades relacionadas con la siembra, procesamiento y tráfico de la droga, se acompañan de amenazas, extorsiones, desplazamientos y confinamientos a los pobladores que habitan esa áreas protegidas y a los funcionarios encargados de administrar estos territorios (Peñaranda et al., 2021).

En los años posteriores al acuerdo de paz, del año 2016 firmado entre el gobierno nacional y la extintas FARC, hubo incremento en las área de cultivos de coca sembradas, demostrando una tendencia decreciente de su mitigación, donde, una posible razón de esta tendencia se da porque la presencia de cultivos ilícitos en Colombia no se distribuye de manera homogénea, las áreas del territorio donde más se concentra esta práctica está distribuida por el territorio colombiano, específicamente en Nariño, Putumayo, Norte de Santander, Cauca, Antioquia Amazonas y a escala municipal en Tumaco, Tibú, Puerto Asís, El Tambo y El Charco, la respuesta de los últimos años al problema, ha fluctuado entre la política de drogas y la ambiental, sin que históricamente se haya dado sinergia entre ambas, esto se explica debido a que las diferentes políticas han venido oscilando entre dos extremos: un enfoque conservador y restrictivo, y otras aproximaciones más conciliadoras, que le apuntan a la concertación y la gradualidad, limitando la capacidad de la sociedad para abordar los desafíos ambientales como la deforestación causada por la práctica de los cultivos de coca (Krause, 2020).

Por otra parte, el conflicto armado ha tenido una influencia crucial en los efectos de la deforestación en Colombia (Hoffmann et al., 2018). Ante esta situación, los grupos ilegales recurren a la deforestación, sin considerar el valor biológico y estético del ecosistema, para lograr la expansión y relocalización de cultivos ilícitos en zonas de difícil acceso para las autoridades. La deforestación para fines de producción de drogas ilegales puede tener grandes impactos ambientales que son reversibles lentamente, reduciendo la biodiversidad, contribuyendo con la liberación de gases de efecto invernadero, incrementando la pérdida de nutrientes del suelo y facilitando la erosión del mismo (Madrigal et al., 2018).

Ante este panorama ambiental, en el marco de las estrategias antidrogas los modelos de sustitución de cultivos ilícitos en algunas áreas han sido bastante restrictivos, el gobierno de

## **Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”**

Bogotá D.C., Colombia

Colombia no ha renunciado a políticas de mano dura, como lo demuestra una tendencia creciente hacia la militarización verde y el despliegue de operaciones militares dentro del PNN (Garzón, 2020). Una muestra importante de estos esfuerzos conjuntos del gobierno y las Fuerzas Militares se da en 2018 con la campaña Artemisa, donde se buscó proteger los parques nacionales de la coca, la deforestación y la presencia de grupos armados ilegales, por medio de operaciones militares.

En virtud a lo anterior la cooperación y la asistencia internacionales son componentes fundamentales para fortalecer las capacidades de las Fuerzas Militares colombianas. Los esfuerzos de colaboración con diversas naciones y organizaciones facilitan el intercambio de conocimientos, tecnología y perspectivas estratégicas esenciales para abordar los desafíos contemporáneos de seguridad. Históricamente, Estados Unidos ha sido uno de los principales socios de Colombia, brindándole ayuda y entrenamiento militar. Programas como el Plan Colombia apuntaban a combatir el narcotráfico y la insurgencia, promoviendo la estabilidad y la seguridad en la región. Además, la cooperación con la OTAN y varios países latinoamericanos ha mejorado la eficacia militar de Colombia.

Además, las colaboraciones regionales en el marco de la Organización de los Estados Americanos (OEA) subrayan la importancia de los enfoques multilaterales. Estas alianzas fomentan la inteligencia compartida, los ejercicios conjuntos y las misiones de mantenimiento de la paz, reforzando así el concepto de seguridad colectiva. Gracias a la colaboración internacional, las FF.MM colombianas han mejorado su preparación operativa. Esta cooperación no sólo contribuye a combatir el terrorismo, sino también a defender los estándares de derechos humanos, fomentando así una relación civil-militar más sólida y propicia a la gobernabilidad democrática.

Desde una mirada histórica, para atender el fundamento de esta ayuda binacional en el marco del estado actual de literatura, Richani describe el prolongado conflicto colombiano como "Un sistema de guerra resultante de una “hegemonía fragmentada” bajo el cual "la violencia se convierte en un mecanismo de gestión de conflictos... que regula múltiples conjuntos de conflictos”. Relaciones, incluidas las relaciones dentro de la élite' (Richani 2020: 326). Dentro de este sistema de guerra, Estados Unidos era un protagonista importante, pero sólo en la medida en que pudiera mantener el equilibrio dentro de estas relaciones y poderes en competencia dinámica. Estados Unidos fue, de hecho, una estructura de apoyo clave para sectores del Estado colombiano, pero su relación con las drogas y otros temas fueron mediados por su papel situacional dentro de la hegemonía fragmentada de Bogotá

El apoyo financiero de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) incluyó condiciones: La idea era construir una infraestructura para la política de drogas, que en ese momento estaba muy centrada en la promoción del cannabis.

A medida que el aparato estatal de control de drogas crecía, la agencia antidrogas de Estados Unidos La Administración para el Control de Drogas (DEA) estaba allí para integrar, capacitar y realizar investigaciones (Nadelmann1993). No estaba claro en ese momento, pero a principios de los años 70 Colombia estaba recién iniciando otra guerra de una república cafetera a una nación de narcóticos” (Britto 2020: 1). Britto atribuye el curioso ascenso de la industria colombiana del cannabis a 'una serie de intersecciones estatales que el gobierno colombiano llevó a cabo 'con el apoyo de Estados Unidos y de intereses empresariales privados' en búsqueda del desarrollo agrario y la formación del estado-nación' (Britto 2020: 2). Los primeros intentos de modificación y el desarrollo de estas regiones apartadas no se debieron a presiones externas de Estados Unidos, sino a presiones antropológicas internas.

*Cooperación de Estados Unidos con Colombia en materia de seguridad*

Estados Unidos valora enormemente su asociación estratégica con Colombia, que se demuestra por su condición de importante aliado no perteneciente a la OTAN. Estados Unidos y Colombia han mantenido relaciones diplomáticas durante más de dos siglos, y nuestra asociación estratégica sigue contribuyendo a una mayor seguridad, estabilidad y prosperidad regionales. Nuestra asociación en materia de seguridad con Colombia, una de las democracias más antiguas de América Latina, se basa en valores democráticos compartidos y se centra en la promoción de la buena gobernanza, instituciones de seguridad inclusivas y responsables, y en el apoyo a Colombia en su camino hacia la paz y la seguridad. La asociación en materia de seguridad entre Estados Unidos y Colombia ha sido vital para promover la estabilidad y la seguridad regionales, principalmente mediante la prestación de asistencia en materia de seguridad y la priorización de una gobernanza eficaz del sector de la seguridad.

*Financiación militar extranjera*

La mayor parte de la asistencia de seguridad de Estados Unidos a Colombia se brindó a través del programa de Financiamiento Militar Extranjero (FMF, por sus siglas en inglés). Desde el año fiscal 2017 hasta el año fiscal 2023, Estados Unidos proporcionó aproximadamente 278 millones de dólares en FMF. El FMF ayuda al Gobierno de Colombia a desarrollar de manera responsable sus capacidades defensivas y, al mismo tiempo, invierte en la base industrial de defensa de Estados Unidos, apoya los empleos estadounidenses y consolida nuestra cooperación en materia de seguridad.

Desde el año fiscal 2020 al año fiscal 2024, el Departamento también proporcionó \$8,69 millones en fondos de Educación y Entrenamiento Militar Internacional (IMET) a Colombia, brindando educación y entrenamiento militar profesional a estudiantes militares para aumentar la

## **Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”**

Bogotá D.C., Colombia

profesionalización, desarrollar capacidad en áreas clave, mejorar la interoperabilidad conjunta, crear una mejor comprensión de los Estados Unidos y desarrollar relaciones duraderas entre militares.

Desde la Segunda Guerra Mundial, Colombia ha apoyado la seguridad colectiva internacional a través de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Fuerza Multinacional de Observadores (MFO) en el Sinaí y la Fuerza de Protección de las Naciones Unidas en la ex Yugoslavia (UNPROFOR). Actualmente, Colombia tiene cuatro expertos en misión (tres de ellos mujeres) desplegados en las misiones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en la República Centroafricana (MINUSCA) y el Sáhara Occidental (MINURSO), y un oficial de Estado Mayor desplegado en el Líbano (FPNUL). Además, Colombia tiene 275 efectivos en el Sinaí.

Además, Colombia es un país socio inactivo en la Iniciativa Global de Operaciones de Paz (GPOI) habiendo recibido menos de 200.000 dólares en fondos de la GPOI para operaciones de mantenimiento de la paz (PKO) entre 2010 y 2016. Con la misión de policía de la ONU en curso en Colombia desde 2016 (Misión de Verificación de la ONU en Colombia), es poco probable que Colombia pueda contribuir con alguna capacidad significativa a otras operaciones de paz internacionales en el futuro previsible.

La cooperación entre Colombia y Estados Unidos ha sido determinante en el fortalecimiento de las capacidades militares y de seguridad del país, especialmente frente al desafío del narcotráfico. Sin embargo, las estrategias aplicadas, centradas en la erradicación forzada y la militarización del territorio, han generado impactos ambientales y sociales significativos, como la deforestación de áreas protegidas, desplazamientos y pérdida de biodiversidad. La expansión de los cultivos ilícitos en zonas ecológicamente sensibles, junto con

## **Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”**

Bogotá D.C., Colombia

la débil presencia estatal, evidencia la falta de articulación entre políticas de seguridad y desarrollo sostenible. Aunque la cooperación ha mejorado la interoperabilidad y profesionalización de las Fuerzas Militares, es necesario un enfoque más integral que contemple la justicia ambiental, la participación comunitaria y el respeto por los derechos humanos.

### **[T1] Efectos ambientales de los planes de lucha antidroga entre Colombia y Estados Unidos (2018–2024)**

Entre 2018 y 2024, la lucha antidrogas en Colombia, influenciada en gran parte por la cooperación bilateral con Estados Unidos, ha tenido consecuencias ambientales profundas, especialmente en regiones donde se concentran los cultivos de coca y donde las estrategias de erradicación han sido más intensivas. Estos impactos han afectado particularmente a ecosistemas sensibles y áreas protegidas, revelando la falta de articulación entre la política ambiental y la política de drogas, así como la necesidad urgente de un enfoque más integral y sostenible.

Una parte importante de los cultivos de coca en Colombia se ubica fuera de la frontera agrícola legalmente permitida, en territorios donde la agricultura está restringida o prohibida por ley, incluyendo áreas protegidas bajo el Sistema de Parques Nacionales Naturales (SPNN) (Bonilla, 2019). En estas zonas, la presencia de cultivos ilícitos genera daños ambientales severos, como la contaminación del agua y del suelo por uso intensivo de agroquímicos, así como procesos acelerados de deforestación. Estos impactos se agravan por la presencia de economías ilegales, el conflicto armado y la violencia que acompaña las actividades de producción y tráfico de drogas, afectando también a las comunidades locales y a los funcionarios encargados de proteger estos ecosistemas (Peñaranda et al., 2021).

Durante el periodo posterior al Acuerdo de Paz de 2016 entre el Estado colombiano y las FARC-EP, se esperaba una reducción sostenida en los cultivos ilícitos gracias al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS). Sin embargo, entre 2018 y 2022 se evidenció un aumento sostenido de las áreas cultivadas con coca, en especial en departamentos como Nariño, Putumayo, Norte de Santander, Cauca y Antioquia, así como en municipios estratégicos como Tumaco, Tibú y Puerto Asís (UNODC, 2023). Este fenómeno se explica por factores estructurales, como la limitada presencia estatal efectiva, la falta de alternativas económicas viables y la persistencia de actores armados ilegales que buscan el control territorial.

Aunque el PNIS propuso una estrategia de sustitución voluntaria en el marco del posacuerdo, su implementación enfrentó múltiples obstáculos, desde demoras burocráticas hasta incumplimientos de los compromisos estatales con las comunidades. A esto se sumó el enfoque contradictorio del Estado colombiano, que durante los gobiernos de Iván Duque (2018–2022) y parte del gobierno de Gustavo Petro (2022–2024), osciló entre políticas de erradicación forzada y discursos de desarrollo alternativo, sin lograr una integración efectiva entre las dimensiones ambiental, social y de seguridad (Krause, 2020).

La ausencia de una política coherente ha resultado en una débil sinergia entre la lucha antidrogas y la protección ambiental. Las estrategias represivas, como la erradicación forzada, especialmente la aérea mediante glifosato, generan daños colaterales considerables. Aunque la aspersión aérea fue suspendida en 2015 por orden de la Corte Constitucional, en 2020 se intentó reactivar su uso, generando intensos debates por sus efectos sobre la salud humana y el medio ambiente. El glifosato ha sido asociado con la pérdida de biodiversidad, afectaciones a fuentes hídricas y daños a cultivos legales (Madrigal et al., 2018).

Por otro lado, la erradicación manual forzada, implementada de manera intensiva entre 2018 y 2021, también conllevó impactos ambientales significativos. En muchas ocasiones, los erradicadores ingresaban a ecosistemas frágiles y áreas protegidas, realizando intervenciones sin un manejo técnico adecuado. Estas operaciones generaron conflictos sociales y desplazamientos, así como la reubicación de cultivos ilícitos a zonas aún más remotas, profundizando el ciclo de deforestación y expansión de la frontera agrícola ilícita (Hoffmann et al., 2018).

Uno de los mayores ejemplos de la militarización de la política antidrogas con implicaciones ambientales fue la campaña Artemisa, lanzada en 2018 como una alianza entre el Ministerio de Defensa y Parques Nacionales Naturales. El objetivo era proteger los parques de la deforestación y la expansión de cultivos de uso ilícito, mediante operaciones militares de control territorial. Aunque esta estrategia logró visibilizar la conexión entre narcotráfico y degradación ambiental, también provocó tensiones con comunidades campesinas, acusadas de ocupar ilegalmente tierras sin atender a las condiciones estructurales de pobreza y exclusión que las empujaron a dichos territorios (Garzón, 2020).

La campaña Artemisa, en lugar de generar procesos de restauración ecológica o planes de manejo ambiental participativos, priorizó las operaciones represivas, aumentando la conflictividad social y la percepción de criminalización del campesinado. Esto socavó la confianza entre las comunidades y el Estado, y debilitó los esfuerzos de gobernanza ambiental y ordenamiento territorial, facilitando incluso el fortalecimiento de economías ilegales en ciertas zonas tras el retiro de las fuerzas militares.

Los impactos ambientales derivados de esta política se manifiestan en la acelerada deforestación de la Amazonía colombiana. Según datos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), entre 2018 y 2022 la región amazónica concentró más del

## **Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”**

Bogotá D.C., Colombia

60% de la deforestación nacional, con focos críticos en los departamentos de Guaviare, Caquetá, Meta y Putumayo. Muchas de estas áreas deforestadas correspondieron a zonas de amortiguación de parques como Chiribiquete, La Macarena y Tinigua, donde se identificaron procesos de apropiación ilegal de tierras, expansión de cultivos de coca y ganadería extensiva como economías ilegales conectadas con el narcotráfico.

Además, la deforestación asociada al narcotráfico genera impactos acumulativos en la biodiversidad y el equilibrio ecológico. La tala de bosques primarios afecta el hábitat de especies endémicas y migratorias, contribuye a la fragmentación de ecosistemas y acelera procesos de erosión y pérdida de fertilidad de los suelos. Estos impactos no solo comprometen la sostenibilidad de los recursos naturales, sino que agravan los efectos del cambio climático a nivel regional, debido a la liberación de carbono por degradación forestal.

Entre 2018 y 2024, la relación entre Colombia y Estados Unidos en la lucha contra las drogas continuó reproduciendo el modelo de “guerra contra las drogas”, priorizando la reducción de oferta a través de la erradicación, sin abordar de fondo las causas estructurales del narcotráfico. Aunque el gobierno de Joe Biden promovió una visión más integral y orientada a la salud pública, la cooperación bilateral continuó canalizando recursos a estrategias de control territorial, inteligencia militar y erradicación manual, más que a proyectos de desarrollo rural sostenible.

La nueva política antidrogas de Colombia 2023–2033, propuesta por el gobierno de Gustavo Petro, plantea un enfoque centrado en el desarrollo humano, la salud pública y el control ambiental. Sin embargo, su implementación enfrenta obstáculos estructurales, como la débil capacidad institucional en los territorios, la persistencia de economías ilegales, y la presión internacional por mostrar resultados inmediatos en la reducción de cultivos. Para que esta

política sea efectiva, se requiere una articulación sólida entre las instituciones ambientales, las comunidades rurales y los organismos de cooperación internacional.

### **Análisis de los efectos ambientales desde la seguridad y la defensa nacional**

La producción y tráfico de drogas en Colombia está profundamente ligado al conflicto armado interno. Diversos grupos armados ilegales participan en la cadena de producción y comercialización de drogas ilícitas, aunque con intereses, niveles de poder y trayectorias históricas diferenciadas (Vargas, 2021). En noviembre de 2016, el Gobierno colombiano y las extintas FARC-EP firmaron el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto, incluyendo un compromiso explícito en el punto cuarto sobre la solución al problema de las drogas ilícitas. Este punto propuso una transformación estructural a través del Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), concebido como una política de sustitución voluntaria y desarrollo rural alternativo que involucraba directamente a comunidades cocaleras en su diseño e implementación (Equipo Negociador de Paz, 2016; Gutiérrez, 2019).

A pesar del carácter innovador del PNIS, su aplicación fue limitada, fragmentaria y plagada de retrasos e incumplimientos. Las altas expectativas generadas entre comunidades cocaleras rápidamente se diluyeron frente a la persistencia de las estrategias coercitivas de erradicación forzada. Algunos estudios coinciden en que el PNIS terminó siendo un apéndice más de la política de erradicación, replicando muchas de sus limitaciones históricas (De los Ríos Jaramillo, 2020; Vélez, 2021; Vélez et al., 2022). El reemplazo de cultivos no logró consolidar alternativas económicas sostenibles ni transformó las relaciones de poder subyacentes a la economía cocalera.

En paralelo, la erradicación forzada mediante operaciones manuales o aspersiones aéreas con glifosato se mantuvo como principal instrumento de control territorial. Esta estrategia, amparada por el artículo 375 del Código Penal (Congreso de la República, 2000), ha sido ampliamente cuestionada por su ineficiencia y efectos negativos. Colombia ha sido el único país andino en permitir el uso de herbicidas químicos como política antidrogas, a pesar de las alertas sobre sus impactos ambientales y sociales (Grisaffi, 2016).

Durante los años 2018 a 2022, bajo el gobierno anterior, la política antidrogas dio un giro significativo con la implementación de la estrategia Ruta Futuro, centrada nuevamente en la erradicación forzada, dejando en segundo plano el cumplimiento del PNIS y los compromisos del Acuerdo de Paz (MDN, 2018; Grupo Internacional de Crisis, 2021). Esta estrategia reactivó el uso del glifosato mediante drones, aviones y helicópteros, a pesar de la suspensión impuesta por la Corte Constitucional en 2017, que prohibió su uso por violar el derecho a la consulta previa de comunidades étnicas y el derecho a un ambiente sano (Corte Constitucional, 2017).

Diversos estudios han demostrado que la erradicación forzada tiene efectos colaterales significativos sobre el ambiente. La principal consecuencia es el fenómeno conocido como “efecto globo”: cuando un área es erradicada, los cultivos de coca se desplazan hacia nuevas zonas, lo que impulsa la deforestación y la ampliación de la frontera agrícola sobre ecosistemas estratégicos (Reyes, 2014). Además, el uso de glifosato y otros químicos ha contaminado suelos, fuentes hídricas y ha afectado la biodiversidad en regiones amazónicas y andinas, generando impactos acumulativos en la resiliencia de los ecosistemas (Rincón et al., 2016; Ibáñez, 2021).

Entre los efectos socioambientales también se incluyen el incremento del conflicto por el control territorial, la presión sobre comunidades campesinas e indígenas, y el debilitamiento de los procesos organizativos locales. Los operativos de erradicación forzada han generado

## **Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”**

Bogotá D.C., Colombia

enfrentamientos con comunidades cocaleras, especialmente en zonas históricamente olvidadas por el Estado, como el Catatumbo, el Bajo Cauca, el sur de Córdoba y el norte del Cauca (Bonilla et al., 2019). Estas tensiones también han derivado en desplazamientos forzados, criminalización de líderes sociales y afectación del tejido comunitario.

En este contexto, el enfoque ambiental ha sido relegado en las políticas antidrogas bilaterales entre Colombia y Estados Unidos. A pesar de que el apoyo norteamericano ha sido determinante para la implementación de estrategias como el Plan Colombia o la misma Ruta Futuro, las condiciones ambientales no han sido integradas de manera sistemática en el diseño de las acciones. La presión por mostrar resultados medibles en hectáreas erradicadas ha llevado a una lógica de corto plazo que ignora los daños ecológicos irreversibles y perpetúa el ciclo de reubicación de cultivos ilícitos.

El periodo 2018–2022 evidenció que la erradicación forzada no logró reducir sostenidamente el área cultivada de coca, que alcanzó cifras récord según informes de la ONU y el SIMCI. Por el contrario, el modelo de guerra contra las drogas mostró su agotamiento estructural, agravando los problemas ambientales, vulnerando derechos humanos y deslegitimando la acción estatal en territorios cocaleros.

A partir del cambio de gobierno en 2022, se propuso un nuevo enfoque en la Política Nacional de Drogas 2023–2033, titulada "Sembrando vida, desterramos el narcotráfico". Esta política reconoce el fracaso histórico de la guerra contra las drogas y sus efectos colaterales negativos, entre ellos los impactos ambientales irreversibles, la expansión del control de grupos criminales y la profundización de la desigualdad territorial (Gobierno de Colombia, 2023).

La nueva estrategia propone una doble vía: “oxígeno” para las comunidades y territorios afectados por el narcotráfico y “asfixia” para los nodos estratégicos del sistema criminal. En

## **Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”**

Bogotá D.C., Colombia

materia ambiental, se plantea priorizar la restauración de ecosistemas afectados por los cultivos ilícitos, así como integrar la gestión ambiental en las políticas de sustitución. También se busca avanzar hacia modelos de desarrollo rural sostenibles, con enfoque agroecológico, acceso a tierras, inversión en infraestructura y protección de áreas de especial importancia ecológica.

La propuesta de la nueva política incluye la articulación con las metas del Acuerdo de Paz y la agenda de transición ecológica, lo que marca un giro conceptual frente a la lógica militarizada de la erradicación. Sin embargo, su éxito dependerá de la capacidad del Estado de cumplir con sus compromisos, garantizar la seguridad en los territorios y priorizar una política de drogas centrada en los derechos, el ambiente y la construcción de paz.

El análisis de las estrategias antidrogas entre Colombia y EE.UU. en el periodo 2018–2024 evidencia que las políticas centradas en la erradicación forzada no solo han fracasado en sus objetivos, sino que han generado graves impactos ambientales y sociales. La deforestación, la contaminación por químicos, el desplazamiento de cultivos y la presión sobre ecosistemas frágiles son solo algunas de las consecuencias de una política que priorizó la coerción sobre la sostenibilidad. La nueva política nacional representa una oportunidad para reconectar la política de drogas con la justicia ambiental y la consolidación de una paz territorial real

Además, los efectos ambientales de los planes de lucha antidroga entre Colombia y Estados Unidos en el periodo 2018–2024 reflejan una política que ha privilegiado el control militar y la erradicación por encima del desarrollo sostenible. Esta estrategia ha generado deforestación, pérdida de biodiversidad, conflictos sociales y debilitamiento de la gobernanza ambiental. Superar esta situación exige un giro de fondo en la política de drogas, que priorice el bienestar ambiental y social de los territorios más afectados por el narcotráfico, con enfoques basados en derechos, participación comunitaria y justicia ambiental.

## **[T1] Propuesta de estrategia de Seguridad Ambiental derivada de la Relación Colombia-Estados Unidos**

Colombia se encuentra en un momento crucial de su historia internacional, en el cual busca posicionarse como una potencia mundial de la vida, alineando su acción exterior con los principios de justicia ambiental, equidad social y paz territorial. La Estrategia Nacional de Cooperación Internacional (ENCI) 2023-2026 definido el marco de esta aspiración al establecer una hoja de ruta que prioriza la seguridad ambiental, entendida como el conjunto de condiciones que garantizan la sostenibilidad ecológica, la resiliencia climática y la protección de los ecosistemas estratégicos del país. En este contexto, la relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos representa una oportunidad estratégica para fortalecer las capacidades nacionales en materia ambiental, mediante una cooperación técnica y financiera orientada a objetivos comunes de desarrollo sostenible y seguridad climática.

### **Fundamento de la estrategia desde la Seguridad Ambiental**

Como objetivo prioritario se debe promover la lucha contra el cambio climático, la justicia ambiental y la transformación productiva del país. Para ello, se podrían establecer tres líneas estratégicas: el ordenamiento territorial alrededor del agua, la acción climática y la transición energética justa. Estas dimensiones se articulan con un enfoque de derechos humanos, género, diversidad y enfoque territorial, orientando la cooperación internacional hacia el fortalecimiento institucional y comunitario en los territorios más vulnerables (Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia [APC-Colombia], 2023).

En términos de gobernanza ambiental, se enfatiza la necesidad de implementar mecanismos de planificación que permitan reducir los conflictos socioambientales, asegurar la participación efectiva de las comunidades y preservar el patrimonio natural del país. Asimismo, se debe destacar la urgencia de abordar la crisis ambiental como un fenómeno estructural que exige soluciones integrales y alianzas multilaterales. Así, la seguridad ambiental se convierte en una estrategia transversal para consolidar la paz, promover la justicia social y enfrentar la crisis climática con responsabilidad colectiva.

### **Estados Unidos como Socio Estratégico en Cooperación Ambiental**

Estados Unidos seguirá siendo el principal socio bilateral de Colombia en materia de cooperación internacional, esta cooperación ha venido profundizándose a través de diálogos de alto nivel que abarcan temas como la lucha contra el narcotráfico, la gobernanza migratoria, la diplomacia pública, la transición energética y el cambio climático. El alineamiento entre los intereses ambientales de Colombia y la agenda climática de Estados Unidos permite establecer sinergias en el desarrollo de proyectos conjuntos que fortalezcan la seguridad ambiental. Además, el enfoque compartido en la protección de bienes públicos globales como la Amazonía, los bosques tropicales y la biodiversidad representa un punto de convergencia político-estratégico.

En esta relación, se destacan también mecanismos como los tratados ambientales multilaterales, el Acuerdo de París y la cooperación en foros regionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), donde se han empezado a integrar variables ambientales en la estrategia hemisférica.

### **Líneas Estratégicas propuestas para una Estrategia Binacional de Seguridad Ambiental**

A partir de los lineamientos establecido en el presente artículo y del potencial de la relación bilateral con Estados Unidos expuesta, se propone una estrategia de seguridad ambiental estructurada en las siguientes líneas:

Se promoverán programas binacionales de conservación en la Amazonía, el Pacífico y el Darién, priorizando el fortalecimiento de sistemas de alerta temprana contra la deforestación y los delitos ambientales. Esta cooperación deberá contemplar el reconocimiento de saberes ancestrales, la participación de pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas, y la protección de defensores ambientales. El monitoreo forestal, mediante tecnologías satelitales y sensores remotos, será una herramienta fundamental en la lucha contra los crímenes ecológicos, integrando capacidades civiles y militares para una vigilancia efectiva del territorio.

### **Transición Energética y Descarbonización**

Colombia y Estados Unidos podrán desarrollar proyectos conjuntos en energías renovables no convencionales, así como iniciativas de descarbonización industrial, movilidad sostenible y eficiencia energética. Se debe incentivar el uso de mecanismos de financiamiento mixto y la inversión de impacto para asegurar la viabilidad económica de estos proyectos, ya que estos esfuerzos se pueden alinear con la meta nacional de neutralidad de carbono a 2050, fortaleciendo la capacidad de adaptación climática y la generación de empleo verde en zonas rurales y periurbanas.

### **Ordenamiento Territorial con Enfoque Ambiental**

La cooperación estadounidense podrá apoyar técnica y financieramente el ordenamiento del territorio colombiano alrededor del agua y la biodiversidad, fortaleciendo las capacidades de las entidades locales para gestionar planes de uso de suelo sostenibles y resilientes al cambio climático. El énfasis en la justicia territorial permitirá una planificación participativa que

## **Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”**

Bogotá D.C., Colombia

reconozca los derechos de comunidades étnicas y campesinas, asegurando la sostenibilidad de cuencas hidrográficas, áreas protegidas y corredores ecológicos.

### **Fortalecimiento Institucional y Diplomacia Ambiental**

Se debe consolidar una agenda bilateral para posicionar la seguridad ambiental como un eje central de la diplomacia entre ambos países. Esto incluye el apoyo a la participación de Colombia en foros multilaterales ambientales, la generación de capacidades en regulación climática y el impulso a instrumentos como los mercados de carbono. El fortalecimiento de las instituciones nacionales encargadas de la gestión ambiental, como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y las Corporaciones Autónomas Regionales, será clave para garantizar la implementación efectiva de los compromisos asumidos en la cooperación binacional.

### **Papel estratégico de las Fuerzas Militares en la Seguridad Ambiental**

En el marco de la seguridad ambiental, las Fuerzas Militares de Colombia (FF.MM.) como se ha mencionado desempeñan un rol estratégico en la protección de los recursos naturales y el territorio nacional frente a amenazas como la minería ilegal, la deforestación, el narcotráfico y otros delitos ambientales. Su participación, orientada por un enfoque de seguridad humana y desarrollo sostenible, contribuye a generar condiciones de gobernabilidad y presencia institucional en regiones históricamente afectadas por el conflicto armado y la marginalidad estatal (Ministerio de Defensa Nacional, 2021).

Además, las FF.MM. han venido integrando capacidades ambientales dentro de su doctrina y operaciones, esto incluye la participación activa en operativos interinstitucionales como Artemisa y Esperanza Amazónica, dirigidos a la protección de parques nacionales, cuencas hidrográficas y zonas de reserva ecológica. Asimismo, su presencia territorial permite actuar como primer respondiente ante emergencias ambientales como incendios forestales, derrames de

## **Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”**

Bogotá D.C., Colombia

hidrocarburos o desastres naturales. Esta experiencia demuestra la necesidad de un enfoque interinstitucional que combine capacidades de defensa, gestión del riesgo y desarrollo sostenible.

En el marco estratégico propuesto para esta investigación de la cooperación bilateral con Estados Unidos, se propone fortalecer las capacidades de las FF.MM. en materia ambiental a través de:

- Entrenamiento conjunto en vigilancia ambiental y monitoreo satelital.
- Dotación tecnológica para la detección de actividades ilegales en zonas protegidas.
- Intercambio de buenas prácticas con agencias como el Servicio Forestal de los Estados Unidos (USFS) y la Guardia Nacional.
- Inclusión del componente ambiental en misiones de estabilización y consolidación territorial.
- Elaboración de protocolos conjuntos de respuesta a emergencias ecológicas transfronterizas.

Este enfoque dual de seguridad y desarrollo, alineado con la Política de Defensa y Seguridad Nacional, fortalecerá el papel de las FF.MM. como actores clave en la implementación de la ENCI, con un énfasis en el respeto de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y el apoyo a las comunidades locales (Ministerio de Defensa Nacional, 2022).

En suma, para el éxito de la estrategia propuesta se debe articular mediante los mecanismos del Sistema Nacional de Cooperación Internacional (Decreto 603 de 2022), el cual establece una estructura de gobernanza con niveles estratégicos, programáticos y operativos. En este marco, se deben activar mesas técnicas binacionales sobre cambio climático, biodiversidad,

## **Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”**

Bogotá D.C., Colombia

energía y desarrollo territorial, con participación de actores gubernamentales, sociedad civil, academia y sector privado.

Asimismo, se deben canalizarán recursos mediante fuentes bilaterales y multilaterales, incluyendo la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el Fondo Verde del Clima, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial. La transparencia y la evaluación serán criterios rectores de la ejecución. Será clave establecer indicadores de seguimiento y sistemas de información ambiental interoperables, que permitan una toma de decisiones basada en evidencia.

### **Indicadores e Impacto Esperado**

La estrategia binacional de seguridad ambiental deberá contar con indicadores claros, tales como:

- Reducción de la deforestación anual en la Amazonía y el Pacífico.
- Incremento en la generación de energía a partir de fuentes renovables.
- Número de proyectos de ordenamiento territorial ambiental implementados.
- Recursos financieros movilizados en cooperación climática.
- Participación de comunidades étnicas y rurales en programas ambientales.
- Operaciones conjuntas de las FF.MM. en protección ambiental y resultados obtenidos.
- Reducción de delitos ambientales reportados en áreas priorizadas.
- Mejoras en los índices de calidad del aire, el agua y cobertura boscosa en zonas intervenidas.

La relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos ofrece una oportunidad única para consolidar una estrategia de seguridad ambiental que articule los intereses nacionales con los bienes públicos globales. En el marco de la ENCI 2023-2026, esta estrategia no solo permitirá

## **Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”**

Bogotá D.C., Colombia

enfrentar los efectos del cambio climático y proteger la biodiversidad, sino también contribuirá a la paz, la justicia social y el fortalecimiento institucional en los territorios. Avanzar hacia una diplomacia ambiental activa, con cooperación efectiva y simétrica, consolidará a Colombia como una potencia mundial de la vida.

La participación activa de las Fuerzas Militares en esta estrategia ofrece un componente adicional de capacidad operativa, presencia territorial y legitimidad institucional, que resulta clave para garantizar la seguridad integral de los territorios y consolidar un modelo de desarrollo sostenible con equidad social y justicia ambiental. Invertir en capacidades ambientales para las FF.MM. es también una apuesta por la seguridad multidimensional que requiere el siglo XXI.

### **[T1] Conclusiones**

La cooperación entre Colombia y Estados Unidos en seguridad ambiental entre 2018 y 2024 consolidó una alianza estratégica centrada en el control territorial y la erradicación de cultivos ilícitos. Aunque fortaleció capacidades institucionales, existen impactos socioambientales significativos, producto de la ausencia de un enfoque integral que limita en algunos aspectos su efectividad para garantizar sostenibilidad ecológica, justicia ambiental y gobernanza participativa en los territorios.

Se evidenció que la cooperación bilateral permitió mejorar la interoperabilidad y profesionalización de las Fuerzas Militares, pero también acentuó tensiones sociales al priorizar acciones represivas sobre procesos comunitarios y restaurativos, afectando la legitimidad del Estado en zonas vulnerables.

**Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”**

Bogotá D.C., Colombia

Las políticas de erradicación forzada y la militarización ambiental, como en la campaña Artemisa, provocaron deforestación, desplazamientos y pérdida de biodiversidad, mostrando la desconexión entre la seguridad ambiental y el desarrollo rural sostenible en territorios estratégicos del país.

La propuesta de una estrategia binacional de seguridad ambiental, basada en justicia climática, participación comunitaria y cooperación técnica, ofrece una vía integral para alinear los intereses ambientales y de seguridad, consolidando una gobernanza ecológica en Colombia.

Este artículo aporta una visión crítica y propositiva sobre la cooperación internacional en seguridad ambiental, resaltando la necesidad de reorientar las políticas antidrogas hacia enfoques sustentables, con énfasis en derechos humanos, paz territorial y justicia ambiental estructural.

## [T1] Referencias (APA séptima edición)

- Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC-Colombia). (2023). Estrategia Nacional de Cooperación Internacional 2023–2026 (ENCI). <https://www.apccolombia.gov.co/>
- Bonilla, MT., Natalu, G. Márquez (2019) Rupturas y continuidades del movimiento cocalero: acciones, repertorios y organizaciones *Análisis Político*, 97 (2019), págs. 3-23
- Bonilla, L., Higuera, I. (2019). Protected Areas under Weak Institutions: Evidence from Colombia. *World Development*: 585–596. Obtenido de <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2019.06.019>
- Britto, L. (2020) El auge de la marihuana: el ascenso y la caída del primer paraíso de las drogas en Colombia .niv de California Press. Documento descargado de <http://www.doi.org/10.1525/9780520974265>
- Garzón, JC, Riveros, C y Tobo, P. 2020. Fuerzas Militares y la Protección del Ambiente. Roles, riesgos y oportunidades. Bogotá: FIP.
- Hoffmann, C., Márquez , T (2018) Una perspectiva local sobre los factores que impulsan la deforestación y las medidas para frenarla en las estribaciones andino-amazónicas de Colombia *Política de Uso del Suelo* , 77, pp. 379 - 391 ,
- Krause, T. (2020)¿Reducir la deforestación en Colombia mientras se construye la paz y se persigue el extractivismo de siempre? *J. Poli. Ecol.* , 27 , págs. 401-418 ,10.2458/v27i1.23186
- Nadelmann, EA. (1993) *Policías a través de las fronteras: La internacionalización de la aplicación de la ley penal en Estados Unidos* . Prensa de la Universidad Estatal de Pensilvania.
- Peñaranda Currie , S. Otero-Bahamon , S.(2021) ¿De qué está hecho el Estado? Coca, caminos y la materialidad de la formación del Estado en la frontera *Desarrollo Mundial* , 141 ( 2021 ) , Artículo 105395 ,10.1016/j.worlddev.2021.105395
- Ministerio de Defensa Nacional. (2021). *Informe de resultados de la campaña Artemisa*. <https://www.mindefensa.gov.co/>

**Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”**

Bogotá D.C., Colombia

Ministerio de Defensa Nacional. (2022). *Política de Defensa y Seguridad para la Legalidad, el Emprendimiento y la Equidad*. <https://www.mindefensa.gov.co/>

Madrigal, E. Andivia , MA Zavala , M. Stoffel , J. Calatayud , R. Sánchez-S alguero , J. Ballesteros-Cánovas (2018) Desentrañar el papel relativo del cambio climático en el crecimiento de los árboles en un entorno mediterráneo extremo *Sci. Total Environ.* , 642 ( 2018 ) , págs . 619-628 ,10.1016/j.scitotenv.2018.06.064

Rincón , HL Correa , DO León , S.(2016) Cultivo de coca y erradicación de cultivos en Colombia: los retos de integrar la realidad rural a una política antidrogas efectiva *Revista Internacional de Políticas sobre Drogas* , 33

Richani, N. (2020) Hegemonía fragmentada y desmantelamiento del sistema de guerra en Colombia. *Estudios en conflicto y terrorismo* , 43: 325–350. DOI: <https://doi.org/10.1080/1057610X.2018.1462135>

Salas Salazar , J. Wolff , FE . (2019) ¿Hacia una paz violenta? Dinámicas territoriales de la violencia en Tumaco (Colombia) antes y después de la desmovilización de las FARC-EP *Confl. Seguro. Desarrollo.* , 19 ( 5 ) , págs. 497 - 520 ,

Vanegas-Cubillos, J. Sylvester, E. Villarino , L. Pérez Marulanda , R. Ganzenmüller , K. Löhr , M. Bonatti , A. (2022) Cambios en la cobertura forestal y políticas públicas: una revisión de la literatura para el posconflicto colombiano *Política de Uso de Suelo* , 114 ( 2022 ) , Artículo 105981

Vélez, J. Robalino , JC Cárdenas , A. Pas , E. (2020) ¿Es suficiente la titulación colectiva para proteger los bosques? Evidencias de comunidades afrodescendientes en el Pacífico colombiano *Desarrollo Mundial*, 128 (2020), Artículo 104837,10.1016/j.worlddev.2019.104837

**Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”**  
Bogotá D.C., Colombia